

No. 41965

**Colombia
and
Peru**

Agreement between the Republic of Colombia and the Republic of Peru on judicial assistance in criminal matters. Lima, 12 July 1994

Entry into force: *9 December 1999 by notification, in accordance with article 24*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Colombia, 2 November 2005*

**Colombie
et
Pérou**

Accord entre la République de Colombie et la République du Pérou relatif à l'entraide judiciaire en matières pénales. Lima, 12 juillet 1994

Entrée en vigueur : *9 décembre 1999 par notification, conformément à l'article 24*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Colombie, 2 novembre 2005*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

La República de Colombia y la República del Perú, deseando intensificar su cooperación en el campo de la asistencia judicial en materia penal

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

TOMANDO EN CONSIDERACION los lazos de amistad y cooperación que los unen como países vecinos;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales y legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de derecho internacional, en especial el de soberanía, integridad territorial y no intervención;

DESEOSOS de adelantar las acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concretos y de agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia judicial;

CONSCIENTES del incremento de la actividad delictiva en zonas fronterizas, convienen en prestarse la más amplia cooperación de conformidad con el procedimiento que se describe a continuación:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA

1. Cada una de las partes se compromete a prestar a la otra Parte, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio la más amplia asistencia en el desarrollo de procedimientos judiciales penales. Asimismo, a brindarse la mayor colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de nacionales de la Parte requirente perseguidos por la justicia que se encuentren irregularmente en la zona fronteriza de los Estados Partes.

Se entenderá como "zona fronteriza" para la República de Colombia, las siguientes circunscripciones municipales: Municipio de Leticia (Amazonas), Municipio de Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Leguizamo (Putumayo), Corregimiento de Atacuari, Corregimiento El Encanto y Corregimiento Arica. Para la República del Perú: el distrito de Putumayo, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. Dicha zona fronteriza regirá sólo para los efectos previstos en el

presente Convenio y será susceptible de ampliación según la voluntad de las partes.

Tal asistencia comprende especialmente:

- a. Práctica y remisión de las pruebas y diligencias judiciales solicitadas.
 - b. Remisión de documentos e informaciones de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.
 - c. Notificación de providencias, autos y sentencias.
 - d. Localización y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Convenio en calidad de testigos o peritos.
 - e. La ejecución de peritajes, decomisos, incautaciones, secuestros, inmovilización de bienes, embargos, así como identificar o detectar el producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones oculares y registros.
 - f. El Estado requerido y el Estado requirente repartirán en partes iguales los bienes objeto de decomiso o el producto de la venta de los mismos, siempre y cuando exista una colaboración efectiva; entre los dos Estados.
 - g. Facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio del Estado requerido a funcionarios del Estado requirente, previa autorización de las autoridades competentes del Estado requerido, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Convenio, siempre que el ordenamiento interno del Estado requerido así lo permita.
 - h. Cualquier otra asistencia acordada entre las partes.
2. Además de la asistencia judicial descrita en el inciso 1. de este artículo, las Partes se comprometen a brindarse la más amplia colaboración en la zona fronteriza en los siguientes términos:
- a. El nacional de una de las partes que sea solicitado por las autoridades judiciales de su país, en virtud de una medida que implique su privación de la libertad, y que para eludirla haya ingresado a la zona fronteriza del otro Estado Parte, será deportado o expulsado del territorio del Estado donde se encuentre, por las autoridades

competentes, y conducido a la frontera para su entrega a los agentes del Estado requirente.

El procedimiento anterior se efectuará, de acuerdo con el Régimen de Extranjería vigente en cada Estado, de manera que siempre se respeten los derechos y garantías del afectado.

- b. Recibido un requerimiento de asistencia, por la Autoridad Central de uno de los Estados Parte, esta deberá comunicar dicho requerimiento de manera expedita a los funcionarios encargados del control de inmigración, enviando la documentación pertinente a fin de que presten su concurso con la mayor celeridad, para la adopción de las medidas de expulsión o deportación y entrega del extranjero a las autoridades del Estado Requirente.

Para esos efectos actuarán como Autoridades Centrales, las indicadas en el artículo 4 del presente Convenio.

- c. Para los efectos de la asistencia a la que se refiere este artículo, se entenderá por Zona Fronteriza la señalada en el artículo 1 inciso 1. del presente Convenio.

ARTICULO 2

HECHOS QUE DAN LUGAR A LA ASISTENCIA

1. La asistencia es prestada aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte requirente no está previsto como delito por la Parte requerida.
2. Sin embargo, para la ejecución de inspecciones personales y registros, decomisos, embargo de bienes, de secuestros con fines probatorios e interceptación telefónica por mandato judicial debidamente motivado, la asistencia es prestada sólo si el hecho por el que se procede en la Parte requirente está previsto como delito también por la ley de la Parte requerida, o bien si resulta que la persona contra quien se procede, ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.

ARTICULO 3

DENEGACION DE LA ASISTENCIA

1. La asistencia es denegada:
 - a) Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la ley de la Parte requerida, o son contrarias

- a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha Parte;
- b) Si el hecho, en relación al que se procede, es considerado por la Parte requerida, delito político o delito exclusivamente militar;
 - c) Si la Parte requerida tiene fundadas razones para suponer que consideraciones relacionadas con la raza, la religión, el sexo, la nacionalidad, el idioma, las opiniones políticas o las condiciones personales o sociales de la persona imputada del delito pueden influir negativamente en el desarrollo del proceso o en el resultado del mismo;
 - d) Si la persona contra quien se procede en la Parte requirente ya ha sido juzgada por el mismo hecho en la Parte Requerida;
 - e) Si la Parte requerida considera que la prestación de la asistencia puede ocasionar un perjuicio razonable a su soberanía, a su seguridad o a otros intereses esenciales nacionales.
2. No obstante en los casos previstos por los incisos b), c) y d) del punto 1, la asistencia es prestada, si resulta que la persona contra quien se procede ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.
 3. La asistencia puede ser rechazada o diferida si la ejecución de las acciones solicitadas interfiere con el procedimiento judicial que se siga en la Parte requerida, indicando los motivos.
 4. El Estado Requerido podrá considerar, antes de negar o posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas condiciones, las cuales serán establecidas por las Autoridades Centrales en cada caso.
 5. En todos los casos la denegatoria de asistencia debe ser motivada.

ARTICULO 4

EJECUCION

Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio, se efectuarán a través de las Autoridades Centrales competentes, tal como se indica en el presente enunciado:

1. La República de Colombia designa como Autoridad Central a la Fiscalía General de la Nación y la República del Perú designa como Autoridad Central al Ministerio

Público - Fiscalía de la Nación. La Autoridad Central de la Parte requerida atenderá de forma expedita las solicitudes, o cuando sea adecuado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas.

2. Para la ejecución de las acciones solicitadas se aplican las disposiciones de la Ley de la Parte requerida, excepto la observación de las formas y modalidades expresamente identificadas por la Parte requirente que no sean contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Parte requerida.
3. La Parte requerida informará a la Parte requirente que así lo haya solicitado, la fecha y el lugar de la ejecución de las acciones requeridas.

TITULO II

FORMAS ESPECIFICAS DE ASISTENCIA

ARTICULO 5

NOTIFICACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. A solicitud de la Parte Requirente y en la medida de lo posible, la Parte Requerida diligenciará cualquier citación, notificación o entrega de documentos relacionados con una solicitud de asistencia o que forme parte de ella de conformidad con su ordenamiento jurídico.
2. La solicitud que tenga por objeto la notificación de acciones debe ser debidamente fundamentada y enviada con razonable anticipación respecto a la fecha útil para la misma notificación.
3. El Estado requerido devolverá una constancia de haber efectuado la diligencia, de acuerdo a la solicitud de asistencia.

ARTICULO 6

ENTREGA DE DOCUMENTOS, INFORMACIONES Y OBJETOS

1. Cuando la solicitud de asistencia tiene por objeto el envío de avisos o documentos, la Parte requerida tiene la facultad de remitir copias certificadas, salvo que la Parte requirente solicite expresamente los originales, la Parte requerida decidirá su viabilidad y lo comunicará a la Parte Requirente.
2. Los documentos y los avisos originales y los objetos enviados a la Parte requirente serán devueltos a la

brevedad posible a la Parte requerida, a menos que esta última renuncie expresamente a este derecho.

3. El Estado requerido podrá proporcionar copias de documentos o de información en posesión de una oficina o institución gubernamental, pero no disponibles al público, en la misma medida y bajo las mismas condiciones que los proporcionaría a sus propias autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley. El Estado requerido podrá, a su discreción, negar la solicitud total o parcialmente.
4. Los documentos proporcionados en virtud de este artículo serán firmados por el funcionario encargado de mantenerlos en custodia y certificados por la Autoridad Central. No se requerirá otra certificación o autenticación. Los documentos certificados a tenor de lo dispuesto por este párrafo serán prueba admisible de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

ARTICULO 7

COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIDA

1. Si la prestación de la asistencia comporta la comparecencia de personas para prestar declaración o proporcionar información documental u objetos en el desarrollo de acciones judiciales en el territorio de la Parte requerida, dicha Parte puede exigir y aplicar las medidas coercitivas y las sanciones previstas por su propia ley.
2. Sin embargo, cuando se trata de la comparecencia de imputados, la Parte requirente debe indicar en la solicitud, las medidas que serían aplicables según su Ley y la Parte requerida no puede sobrepasar tales medidas.
3. La Autoridad Central del Estado requerido informará con antelación la fecha y el lugar en que se realizará la recepción del testimonio o de la prueba pericial.
4. Si la persona citada o notificada para comparecer o rendir informe o proporcionar documentos en el Estado Requerido invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo las leyes del Estado Requirente, su reclamo será dado a conocer a éste a fin de que resuelva lo pertinente.
5. El Estado Requerido enviará a la Parte Requirente una constancia de haberse efectuado la notificación o la citación detallando la manera y fecha en que fue realizada.

6. El Estado Requerido dispondrá la presencia de las personas nombradas en la solicitud de asistencia. Durante el cumplimiento de ésta y, con sujeción a las leyes del Estado requerido, permitirá a las mismas interrogar por intermedio de la autoridad competente a la persona cuyo testimonio se hubiere solicitado. El Estado requirente será responsable de los actos que entorpezcan o impidan la participación en las diligencias de las personas legitimadas.

ARTICULO 8

COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUIRENTE

1. Si la solicitud tiene por objeto la notificación de una citación a comparecer en el Estado requirente, el imputado, el testigo o el perito que no concurra no puede ser sometido por la Parte requerida a sanciones o medidas coercitivas que sobrepasen a las previstas en la legislación de la Parte requirente.
2. Al testigo o al perito que cumpla con la citación, la Parte requirente sufragará los gastos e indemnizaciones de acuerdo a lo previsto por su ley. La Parte requerida, a solicitud de la otra Parte, puede proporcionar un anticipo. La persona requerida será informada de la clase y monto de los gastos que el Estado requirente haya consentido en pagarle.
3. Toda persona citada o notificada a comparecer en calidad de testigo o perito en el territorio del Estado requirente en cumplimiento de una solicitud de asistencia, estará sujeta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico del Estado Requirente.

ARTICULO 9

COOPERACION PARA LA PRACTICA DE PRUEBAS

A solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida proporcionará las facilidades y seguridades necesarias para la actuación de pruebas y diligencias judiciales, dentro de su territorio.

ARTICULO 10

GARANTIAS

En los casos en que la solicitud tiene por objeto la citación de una persona para comparecer en la Parte

requerida, la persona citada, si comparece, no puede ser sometida a procedimientos coercitivos o restrictivos de la libertad personal, por hechos anteriores a la notificación de la citación.

2. La garantía prevista por el párrafo 1, cesa si la persona reclamada, habiendo tenido la posibilidad, no haya dejado el territorio de la Parte requirente, luego de transcurridos quince días desde que su presencia ya no es más requerida por la autoridad judicial o bien, habiéndolo dejado, haya regresado a él voluntariamente.
3. El Estado al que se traslade el testigo o perito, cuando dicha persona haya aceptado cooperar con una solicitud de asistencia, velará por su seguridad personal.

ARTICULO 11

ENVIO DE SENTENCIAS Y DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO JUDICIAL

1. La Parte requerida, cuando envíe una sentencia penal proporcionará también las indicaciones concernientes al respectivo procedimiento que hayan sido eventualmente solicitados por la Parte requirente.
2. Los certificados del registro judicial necesarios a la autoridad judicial de la Parte requirente para el desarrollo de un procedimiento penal, serán enviados a dicha Parte a la brevedad posible.

ARTICULO 12

PLAZOS

En toda solicitud de asistencia en la que exista un plazo para efectuarla, el Estado requirente deberá remitir la solicitud al Estado requerido por lo menos con 30 días de antelación al término establecido. En casos urgentes, el Estado requerido podrá renunciar al plazo para la notificación.

ARTICULO 13

OBTENCION DE PRUEBAS

1. El Estado requerido, de conformidad con su derecho interno y a solicitud del Estado requirente, podrá recibir declaración de personas dentro de un proceso que

- se sigue en el Estado requirente y solicitar la evacuación de las pruebas necesarias.
2. Cualquier interrogatorio deberá ser presentado por escrito y el Estado requerido después de evaluarlo, decidirá sobre su procedencia.
 3. Todas las partes involucradas en el proceso podrán estar presentes en el interrogatorio que estará siempre sujeto a las leyes del Estado requerido.
 4. El Estado requerido podrá entregar cualquier prueba que se encuentre en su territorio y que esté vinculada con algún proceso en el Estado requirente, siempre que la Autoridad Central del Estado requirente formule la solicitud de asistencia de acuerdo con los términos y condiciones del presente convenio.

ARTICULO 14

LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS

El Estado requerido desplegará sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar cualesquiera personas señaladas en una solicitud de asistencia y mantendrá informado al Estado requirente del avance y resultados de sus investigaciones.

ARTICULO 15

BUSQUEDA Y APREHENSION

1. Toda solicitud de búsqueda, aprehensión y/o entrega de cualquier objeto al Estado requirente será cumplida si incluye la información que justifique dicha acción bajo las leyes del Estado requerido.
2. Los funcionarios del Estado requerido que tengan la custodia de objetos aprehendidos certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad Central. No se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán admisibles en el Estado requirente como prueba de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.
3. El Estado requerido no estará obligado a entregar al Estado requirente ningún objeto aprehendido, a menos que este último convenga en cumplir las condiciones que el Estado requerido señale a fin de proteger los intereses que terceros puedan tener en el objeto a ser entregado.

ARTICULO 16

ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO Y OTROS

1. Si una de las Partes contratantes se percatara de la existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes del mismo ubicados en el territorio de la otra Parte contratante, que pudiesen ser decomisados, incautados o de otro modo aprehendidos conforme a las leyes de ese Estado, deberá comunicar este hecho a la Autoridad Central del otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y, por mediación de su Autoridad Central informarán al otro Estado sobre la acción que se haya tomado.
2. Las Partes contratantes se prestarán asistencia judicial en la medida que lo permitan sus respectivas leyes y el presente Convenio, en los procedimientos relacionados con el decomiso de los medios usados en la comisión de delitos de los frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de delitos y el pago de multas impuestas como condena en juicios penales.

ARTICULO 17

INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDENAS

Cada Parte informará anualmente a la otra Parte respecto de las sentencias de condena pronunciadas por sus propias autoridades judiciales, contra ciudadanos de dichas Partes.

TITULO III

PROCEDIMIENTOS Y GASTOS

ARTICULO 18

DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. La asistencia se prestará a solicitud de la Parte requirente.
2. La solicitud debe contener las siguientes informaciones:

- a) La autoridad judicial que intervenga los datos identificatorios de la persona a quien se procesa, así como el objeto y la naturaleza del procedimiento y las normas aplicables al caso;
 - b) El objeto y el motivo de la solicitud;
 - c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia, de conformidad con la legislación del Estado Requirente. Deberá transcribirse o adjuntarse el texto de las disposiciones legales pertinentes, debidamente certificadas;
 - d) Detalle y fundamento de cualquier aspecto o procedimiento particular que la parte requirente desea que se siga;
 - e) El término dentro del cual el Estado requirente desearía que la solicitud sea cumplida.
3. Según la naturaleza de la asistencia solicitada, también incluirá:
- a) La información disponible sobre la identidad y la residencia o domicilio de la persona a ser localizada;
 - b) La identidad y la residencia o domicilio de la persona que debe ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con el proceso;
 - c) La identidad y la residencia o domicilio de las personas que sean solicitadas para la práctica de pruebas;
 - d) La descripción del lugar objeto del registro y de los objetos que deben ser aprehendidos;
 - e) Mención del tipo de bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización, decomiso, incautación, secuestro y/o embargo, y su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
 - f) Cuando fuere el caso una precisión del monto a que asciende la afectación de la medida cautelar;
 - g) Las formas y modalidades especiales eventualmente requeridas para la ejecución de las acciones, así como los datos identificatorios de las autoridades o de las Partes privadas que puedan participar;
 - h) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solicitud.

Si el Estado requerido considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, puede solicitar información adicional al Estado Requirente.

ARTICULO 19

COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre las Partes, se efectuarán a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 20

GASTOS

1. Los Gastos ordinarios que ocasione la ejecución de la solicitud serán sufragados por el Estado Requerido, salvo que los Estados hayan decidido otra cosa. Cuando se requiera para este fin gastos elevados o de carácter extraordinario, los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.
2. Los honorarios de peritos, así como los gastos de viaje, alojamiento, viáticos e imprevistos de los testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de un requerimiento de asistencia, incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen, correrán por cuenta del Estado requirente.

ARTICULO 21

CONFIDENCIALIDAD

Toda tramitación o pruebas proporcionadas por razón del presente Convenio, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que el Estado requirente y el Estado requerido acuerden lo contrario.

TITULO IV

ARTICULO 22

DISPOSICIONES FINALES

Las Autoridades Centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en aplicación del presente Convenio.

La asistencia y los trámites previstos en el presente Convenio no impedirán que cualquiera de las Partes asista a la otra de conformidad con las disposiciones de otros acuerdos internacionales de los cuales sean Parte o de su legislación interna.

ARTICULO 23

INTERPRETACION

Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio será solucionada entre las Autoridades Centrales y en caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a consultas entre las dos Partes.

ARTICULO 24


RATIFICACION Y ENTRADA EN VIGENCIA

1. El presente Convenio tiene una duración indefinida y entrará en vigor a los sesenta días contados a partir de la fecha en que las partes contratantes se comuniquen por notas diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos internos.
2. El presente Convenio podrá ser denunciado por una de las Partes en cualquier momento, mediante una nota diplomática la cual surtirá efecto seis meses (6) después de la fecha de recepción por la otra Parte contratante.
3. La solicitud de asistencia judicial formulada dentro de la vigencia del presente Convenio será atendida aún cuando éste haya sido denunciado.

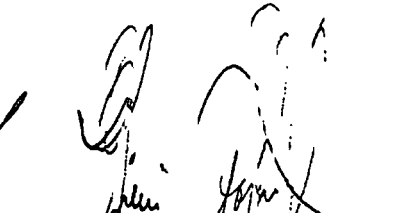
Suscrito en Lima, a los doce días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en duplicado, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Colombia

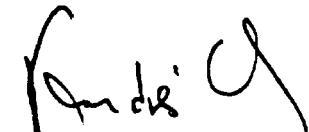
Por la República del Perú




NOEMÍ SANÍN DE RUBIO
Ministra de
Relaciones Exteriores



EFRAIM SOLDEVBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de
Relaciones Exteriores



ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ
Ministro de Justicia
~~y~~



FERNANDO VEGA SANTA GADEA
Ministro de Justicia

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE REPUBLIC OF PERU ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Republic of Colombia and the Republic of Peru, prompted by the desire to strengthen their cooperation in the field of judicial assistance in criminal matters;

Recognizing that the fight against crime requires the joint action of States;

Bearing in mind the ties of friendship and cooperation uniting them as neighbouring countries;

Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States and the principles of international law, especially that of sovereignty, territorial integrity and non-intervention;

Wishing to take joint action to prevent, control and suppress crime in all its manifestations through the coordination of activities and the implementation of specific programmes and to streamline the traditional mechanisms of judicial assistance;

Aware of the increase in criminal activity in border areas, agree to cooperate with each other to the fullest extent possible in accordance with the following procedure:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Obligation to provide assistance

1. Each of the Parties undertakes to provide to the other Party, in fulfilment of the provisions of this Agreement, the fullest possible judicial assistance in the pursuit of judicial criminal proceedings and to cooperate wherever possible in the expulsion, deportation and surrender of prosecuted nationals of the requesting Party who are in an irregular situation in the border area of the States parties.

For the Republic of Colombia, "border area" shall mean the following municipal districts: municipality of Leticia (Amazonas), municipality of Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Leguizamo (Putumayo), and the corregimientos of Atacuari, El Encanto and Arica. For the Republic of Peru: district of Putumayo, province of Maynas, department of Loreto. The border area shall apply only for the purposes of this Agreement and may be extended if the Parties so wish.

Assistance shall include, in particular:

- (a) Conducting preliminary judicial inquiries where requested and communicating the results;
- (b) Transmittal of documents and information in accordance with the terms and conditions of this Agreement;
- (c) Notification of procedural decisions, orders and final decisions;

(d) Location and voluntary transfer of witnesses or experts for the purposes of this Agreement;

(e) Execution of expert appraisals, confiscation, attachment, sequestration, freezing of assets and embargo, and identification or detection of the proceeds from and instruments used in the commission of a crime, visual inspections and searches;

(f) The requested State and the requesting State shall divide confiscated assets or the proceeds from their sale into equal parts, provided that there is effective collaboration between the two States;

(g) Facilitating entry into and granting freedom of movement within the territory of the requested State to officials of the requesting State so that, subject to authorization by the competent authorities of the requested State, they may be present at the execution of the actions described in this Agreement, provided that the internal legal system of the requested State so permits; and

(h) Such other form of assistance as the Parties may agree upon.

2. In addition to the judicial assistance described in paragraph 1 of this article, the Parties undertake to cooperate extensively in the border area, as follows:

(a) A national of one State Party who, pursuant to a measure which entails the deprivation of his or her liberty, is sought by the judicial authorities of his or her country and who has entered the border area of the other State Party in order to evade capture shall be deported or expelled from the territory of the State in which he or she is present by the competent authorities and driven to the border to be surrendered to the agents of the requesting State.

The above procedure shall be carried out in accordance with the aliens legislation in force in each State and in such a way that the rights and guarantees of the affected person are always respected.

(b) The Central Authority of a State Party shall, on receipt of a request for assistance, communicate that request without delay to the immigration control officials, together with the relevant documentation, so as to enlist their assistance forthwith in adopting measures to expel or deport and surrender the alien to the authorities of the requesting State.

For this purpose, the bodies designated in article 4 of this Agreement shall act as Central Authorities.

(c) For the purposes of the assistance referred to in this article, the border area shall be taken to mean the area described in article 1, paragraph 1, of this Agreement.

Article 2. Situations giving rise to assistance

1. Assistance may be provided even if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party does not constitute an offence in the requested Party.

2. Nonetheless, for the execution of inspections, searches, confiscations, property embargoes, seizures for evidentiary purposes, and interception of telephone communications pursuant to a judicial order, assistance may be provided only if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party is also considered an of-

fence under the law of the requested Party, or if the defendant has freely given his written consent.

Article 3. Refusal of assistance

1. Assistance shall be refused:
 - (a) If the actions requested are prohibited by the law of the requested Party or are contrary to the fundamental principles of that Party's legal system;
 - (b) If the act to which the proceedings relate is considered by the requested Party to be a political or an exclusively military offence;
 - (c) If the requested Party has well-founded reasons for concluding that considerations related to the race, religion, gender, nationality, language, political views or personal or social status of the person accused of the offence may have an adverse impact on the course or outcome of the proceedings;
 - (d) If the person against whom proceedings have been instituted in the requesting Party has already been tried for the same act in the requested Party;
 - (e) If the requested Party considers that provision of the assistance may have serious adverse consequences for its sovereignty, security or other vital national interest.
2. Nonetheless, assistance shall be provided in the cases provided for in subparagraphs (b), (c) and (d) of paragraph 1 if the person against whom the proceedings have been instituted freely gives his written consent.
3. Assistance may be refused or deferred if execution of the actions requested interferes with the judicial proceeding instituted in the requested Party, which shall indicate the reasons for its decision.
4. The requested State may, before refusing or deferring action on a request for assistance, consider subjecting the request to certain conditions, which shall be established in each case by the Central Authorities.
5. The grounds for refusal of assistance shall in all cases be stated.

Article 4. Execution

Requests for assistance under this Agreement shall be made through the competent Central Authorities, as outlined below:

1. The Republic of Colombia designates the Office of the Attorney-General as its Central Authority, and the Republic of Peru designates the Office of the Attorney-General as its Central Authority. The Central Authority of the requested Party shall deal expeditiously with requests and, where appropriate, shall transmit them to other competent authorities for action.
2. The legislation of the requested Party shall apply in the execution of the actions requested, provided that any forms and modalities expressly identified by the requesting Party that are not contrary to the fundamental principles of the legal system of the requested Party are observed.

3. The requested Party shall inform the requesting Party of the date and place of the execution of the requested actions.

TITLE II. SPECIFIC FORMS OF ASSISTANCE

Article 5. Service and transmittal of documents

1. At the request of the requesting Party, and to the extent possible, the requested Party shall take action on any summons, service or transmittal of documents relating to or forming part of a request for assistance, in accordance with its legal system.

2. A request for the service of process shall be duly substantiated and shall be sent sufficiently in advance of the scheduled date.

3. The requested State shall provide evidence of having executed the action, in accordance with the request for assistance.

Article 6. Transmittal of documents, information and objects

1. Where a request for assistance concerns the transmittal of notices or documents, the requested Party may provide certified copies, except where the requesting Party specifically requests original documents, in which case the requested Party shall determine whether it is possible to comply with the request and shall inform the requesting Party accordingly.

2. Original documents and notices and objects transmitted to the requesting Party shall be returned as soon as possible to the requested Party, unless the requested Party expressly waives that right.

3. The requested Party may provide copies of documents or information which are in the possession of a governmental office or institution but not open to public access to the same extent and under the same conditions as it would make them available to its own law enforcement authorities. The requested State may, at its discretion, refuse the request in whole or in part.

4. Documents provided pursuant to this article shall be signed by the official entrusted with their safekeeping and certified by the Central Authority. No other certification or authentication shall be required. Documents certified in accordance with the provisions of this paragraph shall be admissible as evidence of the veracity of the statements contained therein.

Article 7. Appearance of persons in the requested Party

1. If the provision of assistance requires the appearance of persons to give evidence or provide documentary information or objects in the course of judicial proceedings in the territory of the requested Party, such Party may apply and enforce the coercive measures and penalties provided for under its own legislation.

2. However, when dealing with the appearance of defendants, the requesting Party shall indicate in its request the measures which would be applied under its law, and the requested Party may not exceed such measures.

3. The Central Authority of the requested Party shall give advance notice of the date and place for receiving testimony or expert evidence.

4. If the person who is summoned or notified to appear, or to submit a report or to provide documents in the requested Party invokes immunity, incapacity or privileges under the laws of the requesting Party, the latter shall be informed of the plea of that person so that the appropriate measures may be taken.

5. The requested State shall transmit evidence to the requesting State that the summons or notification has been served, specifying how and on what date service was carried out.

6. The persons mentioned in the request for assistance shall be present in the requested State. In fulfilling the request, and subject to its laws, the requested State shall allow the persons named to question the person whose testimony has been requested, through the intermediary of the competent authority. The requesting State shall be responsible for any acts that hinder or impede the participation in the judicial proceedings of the authorized persons.

Article 8. Appearance of persons in the requesting Party

1. If the request is in the form of a summons for a defendant, witness or expert to appear in the requesting State, failure to appear shall not result in the application by the requested Party of penalties or coercive measures that exceed those provided for under the legislation of the requesting Party.

2. The requesting Party shall pay the expenses and allowances of the witness or expert responding to the summons, in accordance with the provisions of its legislation. The requested Party may, at the request of the other Party, provide an advance payment. The person requested shall be informed of the type and amount of the expenses that the requesting State has agreed to pay.

3. Any person who is summoned or notified to appear as a witness or expert in the territory of the requesting Party in fulfilment of a request for assistance shall be subject to the legal system of the requesting Party.

Article 9. Cooperation in the provision of evidence

At the request of the requesting Party, the requested Party shall provide the necessary facilities and assurances for the presentation of documentary evidence and conduct of judicial proceedings within its territory.

Article 10. Guarantees

1. Where a request is for a person to be summoned to appear in the requested Party, and where the person so summoned appears, he or she may not be subjected to coercive

measures or restrictions on his or her personal freedom, on account of acts committed prior to the notification of the summons.

2. The guarantee provided for in paragraph 1 shall cease to apply if the requested person, being free to leave, has not left the territory of the requesting Party within 15 days of his or her presence no longer being required by the judicial authority, or if, having left, he or she has returned voluntarily.

3. Where the witness or expert has agreed to cooperate with a request for assistance, the State to which he or she is transferred shall guarantee his or her personal safety.

Article 11. Transmittal of final rulings and judicial records

1. When transmitting a final ruling in a criminal case, the requested Party shall also provide any information related to the respective proceedings that may have been requested by the requesting Party.

2. Judicial records that are necessary for the conduct of criminal proceedings shall be transmitted to the requesting Party as soon as possible.

Article 12. Time limits

In the case of all requests for assistance in which a time limit is set for compliance, the requesting State shall transmit the request to the requested State at least 30 days prior to the expiration of the time limit. In urgent cases, the requested State may waive the deadline for notification.

Article 13. Obtaining of evidence

1. The requested State may, in accordance with its law and at the request of the requesting State, obtain statements from persons in proceedings instituted in the requesting State and may request the presentation of the necessary evidence.

2. All questions must be submitted in writing and the requested State shall decide on their merits after reviewing them.

3. All the parties involved in the proceedings may be present during the questioning, which shall be subject to the law of the requested State.

4. The requested State may surrender any evidence found in its territory which is linked to proceedings in the requesting State, provided that the Central Authority of the requesting State formulates a request for assistance in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Article 14. Location and identification of persons

The requested State shall use its best endeavours to locate and identify any person described in a request for assistance and shall keep the requesting State informed of the progress and results of its investigations.

Article 15. Search and seizure

1. All requests for the search and seizure and/or delivery of any object to the requesting State shall be acted on if they include information that justifies such action under the laws of the requested State.

2. Officials of the requested State who have custody of seized objects shall attest to the unbroken chain of custody, the identity of the object and the integrity of its condition in a document, which shall be certified by the Central Authority. No other certification or authentication shall be required. Certificates shall be admissible in the requesting State as evidence of the veracity of the statements contained therein.

3. The requested State shall not be obliged to deliver to the requesting State any seized object, unless the latter agrees to fulfil the conditions set by the requested State in order to protect the interests of any third parties in the object to be delivered.

Article 16. Assistance in confiscation and other proceedings

1. Where a Contracting Party becomes aware of the existence in the territory of the other Contracting Party of the means to commit a crime and the proceeds of the crime which may be confiscated, seized or secured in some other way in accordance with the latter's legislation, it shall communicate this fact to the Central Authority of the other State. If the other State has jurisdiction, it shall transmit such information to its authorities in order to determine whether any measures should be taken. The said authorities shall make their decision in accordance with the laws of their country and, through the intermediary of their Central Authority, shall inform the other State of the action that has been taken.

2. The Contracting Parties shall provide judicial assistance to the extent permitted by their respective laws and this Agreement in proceedings related to the confiscation of the instrumentalities used in the commission of crimes and the proceeds therefrom, restitution to the victims of crimes, and payment of the fines imposed as penalties in criminal proceedings.

Article 17. Information on sentencing

Each Party shall inform the other Party annually about the sentences imposed by its own judicial authorities on citizens of the other Party.

TITLE III. PROCEEDINGS AND EXPENSES

Article 18. Proceedings

1. Assistance shall be provided at the request of the requesting Party.
2. The request shall contain the following information:

(a) The judicial authority involved, information permitting the identification of the person against whom proceedings have been instituted, the subject matter and nature of the proceedings and the legislative basis of the case;

- (b) The purpose of and reason for the request;
- (c) A description of the acts constituting the crime in respect of which assistance is being sought, in conformity with the legislation of the requesting State. The text of the duly certified applicable legal provisions shall be reproduced therein or attached;
- (d) Details of and grounds for any particular matter or procedure that the requesting Party may wish to be noted or followed; and
- (e) The deadline by which the requesting State would like its request to be fulfilled.

3. Depending on the nature of the judicial assistance requested, the request shall also include:

- (a) All available information on the identity and residence or domicile of the person to be located;
- (b) The identity and residence or domicile of the person to be summoned or notified and the relationship of that person to the proceedings;
- (c) The identity and residence or domicile of persons being called to provide evidence;
- (d) The description of the place to be searched and the objects to be seized;
- (e) Mention of the type of property or assets in respect of which freezing, confiscation, impoundment, seizure and/or attachment is requested and its relationship to the person against whom judicial proceedings have been or are about to be instituted;
- (f) Where appropriate, specification of the amount allocated to the precautionary measure;
- (g) The special arrangements that may be required for the execution of the measures and the information that will permit any participating authorities or private individuals to be identified; and
- (h) Such other information as may be necessary for the fulfilment of the request.

If the requested State considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request additional information from the requesting State.

Article 19. Communications

The Parties shall communicate with each other through their respective Ministries of Foreign Affairs.

Article 20. Expenses

1. The ordinary costs of executing a request for judicial assistance shall be borne by the requested State, unless otherwise determined by the States. If expenses of a substantial or extraordinary nature are required to execute the request, the States shall consult one another in order to determine the terms and conditions for execution of the request and the manner in which the costs shall be borne.

2. The fees of experts and the travel, accommodation, subsistence and unforeseen expenses of witnesses or experts who must travel pursuant to a request for assistance, including those of the officials accompanying them, shall be borne by the requesting State.

Article 21. Confidentiality

Any procedure undertaken or evidence provided pursuant to this Agreement shall be kept strictly confidential, except where such information is required in investigations that are part of a criminal proceeding described in the request for assistance, or where the requesting State and the requested State agree otherwise.

TITLE IV

Article 22. Final provisions

The Central Authorities shall hold consultations on agreed dates for the purpose of evaluating the assistance provided pursuant to this Agreement.

The assistance and proceedings provided for in this Agreement shall not prevent either Party from assisting the other Party in conformity with the provisions of other international agreements to which they are parties or their own legislation.

Article 23. Interpretation

Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of this Agreement shall be settled between the Central Authorities; in the event of failure to reach an agreement, consultations shall take place between the two Parties.

Article 24. Ratification and entry into force

1. This Agreement shall remain in force indefinitely and shall enter into force sixty days after the date on which the Contracting Parties notify each other, through the diplomatic channel, that their domestic requirements have been fulfilled.

2. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing through the diplomatic channel, which shall take effect six months (6) from the date on which the other Contracting Party receives it.

3. A request for judicial assistance presented while this Agreement is in force shall be met even if the Agreement has been terminated.

Done at Lima on 12 July 1994, in duplicate, in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Republic of Colombia:

NOEMI SANIN DE RUBIO
Minister for Foreign Affairs

ANDRES GONZALEZ DIAZ
Minister of Justice and Legal Affairs

For the Republic of Peru:

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
President of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs

FERNANDO VEGA SANTA GADEA
Minister of Justice

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LA RÉPUBLIQUE
DU PÉROU RELATIF À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRES PÉ-
NALES

La République de Colombie et la République du Pérou, animées du désir de renforcer leur coopération dans le domaine de l'assistance judiciaire en matières pénales;

Reconnaissant que la lutte contre la criminalité exige de la part des États une action conjointe;

Considérant les liens d'amitié et de coopération qui les unissent en tant que pays voisins;

Respectant les normes constitutionnelles, juridiques et administratives de leurs États ainsi que les principes du droit international, en particulier la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-intervention;

Désireuses d'engager des actions communes de prévention, de contrôle et de répression de la criminalité sous toutes ses formes grâce à la coordination d'activités et à la mise en oeuvre de programmes spécifiques et à la rationalisation des mécanismes classiques d'assistance judiciaire;

Conscientes de la recrudescence de la criminalité dans les zones frontières, conviennent de coopérer entre elles de la façon la plus large possible conformément à la procédure ci-après :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Obligation d'assistance

1. Chacune des Parties s'engage à fournir à l'autre Partie, en application des dispositions du présent Accord, l'assistance judiciaire la plus complète possible dans les procédures judiciaires et à coopérer toutes les fois que possible s'agissant des mesures d'expulsion, déportation et remise à la justice de ressortissants de la Partie requérante faisant l'objet de poursuites judiciaires qui se trouvent en situation irrégulière dans la zone frontière des Parties contractantes.

Pour la République de Colombie, l'expression "zone frontière" désigne les districts municipaux ci-après : la municipalité de Leticia (Amazonas), la municipalité de Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Leguizamo (Putumayo), et les corregimientos d'Atacuari, El Encanto et Arica. Pour la République du Pérou : le district de Putumayo, la province de Maynas, le département de Loreto. La zone frontière ne s'applique qu'aux fins du présent Accord et peut être élargie si les Parties le désirent.

L'assistance comprendra, notamment :

- a. l'exécution d'enquêtes judiciaires préliminaires, lorsque la demande en est

faite et la communication des résultats;

b. la transmission de documents et de renseignements conformément aux dispositions du présent Accord;

c. la notification des décisions de procédure, des ordres et des décisions finales;

d. la localisation et le transfert volontaire de témoins et d'experts aux fins du présent Accord;

e. la mise à exécution des évaluations d'experts, des décisions de confiscation, saisie, séquestration, gel d'actifs et embargo, et l'identification ou la détection du produit d'activités criminelles ou d'instruments utilisés pour commettre des actes criminels, des inspections visuelles et des fouilles;

f. la Partie requise et la Partie requérante partageront les actifs confisqués ou le produit de leurs ventes à parts égales, à condition qu'il y ait une collaboration effective entre les deux États;

g. l'adoption de mesures facilitant l'entrée sur le territoire de la Partie requise et la liberté de mouvement de représentants de la Partie requérante afin que, sous réserve d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes de la Partie requise, lesdits représentants puissent assister à l'exécution des options décrites dans le présent Accord, à condition que le système juridique interne de la Partie requise le permette;

h. toute autre forme d'assistance dont les Parties peuvent convenir.

2. Outre l'assistance judiciaire décrite au paragraphe 1 du présent Article, les Parties s'engagent à coopérer dans une très large mesure dans la zone frontière, comme suit :

a. un ressortissant d'une Partie contractante qui, suite à une mesure entraînant la perte de sa liberté est recherché par les autorités judiciaires de son pays et qui a pénétré dans la zone frontière de l'autre partie contractante afin d'éviter sa capture sera déporté ou extradé du territoire de l'État dans lequel il est présent par les autorités compétentes et sera conduit jusqu'à la frontière pour être remis aux agents de la Partie requérante.

La procédure susmentionnée sera mise en oeuvre conformément à la législation relative aux étrangers en vigueur dans chaque État et de telle façon que les droits et garanties de la personne intéressée soient toujours respectés.

b. l'autorité centrale d'un État contractant recevant une demande d'assistance la communiquera sans délai au département de contrôle de l'immigration avec les documents pertinents de façon à obtenir leur assistance immédiatement pour l'adoption de mesures visant à expulser ou à déporter la personne étrangère en question et la remettre aux autorités de l'État requérant.

À cet effet, les organismes désignés à l'Article 4 du présent Accord feront fonction d'autorités centrales.

c. aux fins de l'assistance visée dans le présent Article, la zone frontière sera la zone décrite au paragraphe 1 de l'Article premier du présent Accord.

Article 2. Circonstances donnant lieu à assistance

1. L'assistance peut être accordée même si les faits ayant motivé la procédure insti-

tuée dans la Partie requérante ne constituent pas une infraction aux lois de la Partie requise.

2. Toutefois, en ce qui concerne l'exécution des inspections, fouilles, confiscations, mises de biens sous séquestre, saisies afin de constituer des preuves et interception de communications téléphoniques aux termes d'un mandat l'assistance n'est accordée que si les faits qui en motivent la requête sont aussi considérés comme une infraction aux lois de la Partie requise ou lorsque la personne visée a donné son consentement écrit.

Article 3. Refus d'assistance

1. La demande d'assistance peut être refusée si :

a. les mesures demandées sont interdites par la législation de la Partie requise ou sont contraires aux principes fondamentaux du système juridique de ladite Partie;

b. le fait au titre duquel la procédure a été instituée est considéré par la Partie requise comme étant un délit politique ou militaire;

c. la Partie requise a de bonnes raisons de conclure que des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité, de langue, d'opinions politiques ou de statut personnel ou social de la personne accusée du délit pourraient avoir une incidence négative sur le déroulement ou l'issue de la procédure;

d. la personne contre laquelle l'instance a été introduite dans la Partie requérante a déjà été poursuivie pour le même acte que celui au titre duquel la demande d'assistance est présentée;

e. la Partie requise estime que la fourniture de l'assistance pourrait avoir de graves conséquences néfastes sur sa souveraineté, sa sécurité ou ses autres intérêts nationaux vitaux;

2. Toutefois, l'assistance sera fournie dans les cas prévus aux alinéas b, c et d du paragraphe 1 si la personne contre laquelle l'instance a été introduite y consent librement par écrit.

3. L'assistance peut être refusée ou reportée si l'exécution des mesures requises entrave la procédure judiciaire engagée dans la Partie requise, laquelle indiquera les raisons de sa décision.

4. La Partie requise peut, avant de refuser ou de reporter la réponse à une demande d'assistance, envisager de soumettre la demande à certaines conditions, qui seront établies dans chaque cas par les autorités centrales.

5. Dans tous les cas, les raisons d'un refus d'assistance devront être indiquées.

Article 4. Exécution

Les demandes d'assistance au titre du présent Accord seront présentées par l'intermédiaire des autorités centrales compétentes, comme indiqué ci-après :

1. La République de Colombie désigne le Bureau du Procureur général comme étant son autorité centrale et la République du Pérou désigne le Bureau du Procureur général comme étant son autorité centrale. L'autorité centrale de la Partie requise traite rapidement

les demandes et, le cas échéant, les transmet à d'autres autorités compétentes.

2. La législation de la Partie requise s'applique à l'exécution des mesures demandées, à condition que toutes formes et toutes modalités expressément identifiées par la Partie requérante ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de son système juridique.

3. La Partie requise informe la Partie requérante de la date et du lieu de l'exécution des mesures demandées.

TITRE II. FORMES SPÉCIALES D'ASSISTANCE

Article 5. Signification et transmission de documents

1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise prend des mesures concernant toute assignation, signification ou transmission de documents en rapport avec une demande d'assistance, ou faisant partie de ladite demande, conformément à sa législation nationale.

2. Une demande de signification d'une procédure doit être dûment justifiée et présentée dans un délai raisonnable avant la date de comparution prévue.

3. La Partie requise fournit les éléments de preuve de l'exécution de l'action conformément à la demande d'assistance.

Article 6. Transmission de documents, de renseignements et d'objets

1. Lorsque la demande d'assistance a trait à la transmission d'avis ou de documents, la Partie requise peut fournir des copies certifiées conformes, sauf lorsque la Partie requérante demande spécifiquement des documents originaux, auquel cas, la Partie requise détermine dans quelle mesure il est possible de procéder ainsi et informe la Partie requérante en conséquence.

2. Les documents originaux, les avis et objets transmis à la Partie requérante sont rendus le plus tôt possible à la Partie requise, à moins que la Partie requise ne renonce expressément à ce droit.

3. La Partie requise peut fournir des copies de documents ou de renseignements détenus par des bureaux ou services administratifs et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et les mêmes conditions auxquelles elle les mettrait à la disposition de ses propres autorités chargées de l'application de la loi. La Partie requise peut, à sa discrétion, refuser la demande en tout ou en partie.

4. Les documents fournis en vertu du présent Article seront signés par le représentant officiel chargé de leur bonne garde et seront certifiés conformes par les autorités centrales. Aucune autre certification ou authentification ne sera exigée. Les documents certifiés conformes en vertu des dispositions du présent paragraphe seront admis comme preuves de la véracité des déclarations qui y sont contenues.

Article 7. Comparution de personnes dans la Partie requise

1. Si la fourniture de l'assistance judiciaire demandée nécessite la comparution de personnes pour fournir des éléments de preuves ou des renseignements documentaires ou des objets dans le cadre de l'action engagée sur le territoire de la Partie requise, ladite Partie peut appliquer et faire respecter les moyens de coercition prévus par sa propre législation.

2. Toutefois, s'agissant de la comparution des personnes accusées, la Partie requérante indiquera dans sa demande les mesures qui seraient appliquées dans le cadre de sa propre législation et la Partie requise ne dépasse pas lesdites mesures.

3. L'autorité centrale de la Partie requise notifie à l'avance la date et le lieu de réception de la déposition ou du témoignage d'expert.

4. Si la personne qui est sommée ou notifiée de comparaître, ou de présenter un rapport ou de fournir des documents dans la Partie requise invoque l'immunité, l'incapacité ou des privilèges au terme de la législation de la Partie requérante, cette dernière est informée de la requête de ladite personne afin que les mesures appropriées puissent être prises.

5. La Partie requise communique les preuves à la Partie requérante que la sommation ou la notification ont été reçues, en spécifiant le mode utilisé pour la sommation ou la notification et la date de ces dernières.

6. Les personnes mentionnées dans la demande d'assistance seront présentes dans la Partie requise. Cette dernière, en donnant suite à la demande et sous réserve de sa législation, autorisera les personnes désignées à questionner la personne dont le témoignage a été requis, par l'intermédiaire de l'autorité compétente. La Partie requérante assumera la responsabilité de tous actes susceptibles d'entraver ou de gêner la participation des personnes autorisées à la procédure judiciaire.

Article 8. Comparution de personnes dans la Partie requérante

1. Si la demande prend la forme d'une sommation adressée à un prévenu, à un témoin ou à un expert de comparaître dans la Partie requérante, la non comparution n'entraîne pas l'application par la Partie requise de pénalités ou de mesures de coercition dépassant celles que prévoit la législation de la Partie requérante.

2. La Partie requérante prend à sa charge les dépenses et indemnités de témoins ou des experts répondant à la sommation, conformément aux dispositions de sa législation. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, effectuer un paiement anticipé. La personne sommée est informée du type et du montant des frais que la Partie requérante a accepté de lui verser.

3. Toute personne sommée de comparaître ou à qui il est notifié de comparaître en tant que témoin ou expert sur le territoire de la Partie requérante suite à une demande d'as-

sistance est soumise à la législation de la Partie requérante.

Article 9. Coopération en matière de fourniture de preuves

À la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournira les installations et assurances nécessaires à la présentation des documents servant de preuves et à la conduite de la procédure judiciaire sur son territoire.

Article 10. Garanties

1. Lorsqu'une personne est sommée de comparaître dans la Partie requise et lorsqu'elle comparait, aucune mesure de coercition ni restriction à sa liberté personnelle ne peut lui être appliquée en raison des actes commis avant la notification de la sommation.

2. La garantie prévue au paragraphe 1 cesse de s'appliquer si la personne requise, étant libre de quitter le territoire de la Partie requérante, ne l'a pas fait dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle sa présence n'est plus exigée par l'autorité judiciaire ou si, ayant quitté ledit territoire elle y est retournée volontairement.

3. Lorsque le témoin ou l'expert a accepté de coopérer s'agissant d'une demande d'assistance, l'État dans lequel il est transféré garantit sa sécurité personnelle.

Article 11. Transmission des décisions définitives et des dossiers judiciaires

1. En transmettant une décision définitive dans une affaire pénale, la Partie requise fournit également tout renseignement relatif à la procédure que pourrait avoir demandé la Partie requérante.

2. Les dossiers judiciaires nécessaires à la conduite d'une instance pénale sont transmis à la Partie requérante le plus tôt possible.

Article 12. Délais d'exécution

Dans le cas de toutes les demandes d'assistance pour lesquelles un délai d'exécution est fixé, la Partie requérante transmet la demande à la Partie requise au moins 30 jours avant l'expiration du délai d'exécution. Dans les cas d'urgence, la Partie requise peut déroger à la date limite de notification.

Article 13. Obtention des éléments de preuve

1. La Partie requise peut, conformément à sa législation nationale et à la demande de la Partie requérante, recevoir des éléments de preuve de personnes dans le cadre d'une procédure engagée dans la Partie requérante et peut demander la présentation des éléments de preuve nécessaires.

2. Toutes les questions doivent être posées par écrit et la Partie requise détermine leur bien-fondé juridique après les avoir étudiées.

3. Toutes les personnes concernées par la procédure peuvent assister à l'interrogatoi-

re, qui est toujours mené conformément à la législation de la Partie requise.

4. La Partie requise peut soumettre toutes les preuves trouvées sur son territoire et qui sont liées à la procédure dans la Partie requérante, à condition que l'autorité centrale de la Partie requérante formule une demande d'assistance conformément aux conditions du présent Accord.

Article 14. Localisation et identification de personnes

La Partie requise fait tout son possible pour localiser et identifier toute personne décrite dans une demande d'assistance et tient la Partie requérante informée des progrès et des résultats de ses recherches.

Article 15. Perquisition et saisie

1. Toutes les demandes de perquisition et saisie, retenue et/ou remise de tout objet à la Partie requérante sont satisfaites si elles comprennent les renseignements qui justifient une telle action aux termes de la législation de la Partie requise.

2. Les autorités de la Partie requise qui ont la garde des objets saisis attestent de la chaîne de possession, de l'identité de l'objet et de l'intégrité de sa condition. L'attestation est certifiée par l'autorité centrale. Aucune autre attestation ou certification n'est requise. Les attestations sont admissibles dans la Partie requérante comme éléments de preuve de la véracité des déclarations qui y sont contenues.

3. La Partie requise n'est pas tenue de livrer à la Partie requérante un objet saisi si la Partie requérante ne remplit pas les conditions fixées par la Partie requise pour protéger les intérêts de tiers dans l'objet à livrer.

Article 16. Assistance en matière de confiscation et d'autres procédures

1. Lorsque l'une ou l'autre Partie est informée de l'existence de moyens de commettre une infraction et du produit de l'infraction sur le territoire de l'autre Partie, qui peuvent être confisqués, saisis ou mis en sûreté de toute autre manière conformément à la législation de cette autre Partie, elle communique ce fait à l'autorité centrale de l'autre Partie. Ladite autre Partie, si elle a juridiction, communique ces renseignements à ses autorités afin de déterminer si des mesures doivent être prises. Lesdites autorités prennent leur décision conformément à la législation de leur pays et, par l'intermédiaire de leur autorité centrale, informent l'autre Partie de la mesure qui a été prise.

2. Les Parties accordent l'assistance judiciaire, dans la mesure permise par leurs législations respectives et le présent Accord, dans les procédures liées à la confiscation des instruments ayant servi à commettre des délits et de leur produit, à la restitution aux victimes des délits et au paiement d'amendes imposées à titre de pénalité dans les poursuites pénales.

Article 17. Renseignements concernant les peines imposées

Chaque Partie informe chaque année l'autre Partie des peines prononcées par ses autorités judiciaires à l'encontre des citoyens de l'autre Partie.

TITRE III. POURSUITES JUDICIAIRES ET DÉPENSES

Article 18. Poursuites judiciaires

1. L'assistance est fournie à la demande de la Partie requérante.
2. La demande est présentée par écrit et contient les renseignements suivants :
 - a. l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, les renseignements permettant l'identification de la personne à l'égard de laquelle la procédure est engagée, l'objet et la nature de la procédure et la base législative sur laquelle le cas repose;
 - b. l'objectif et les raisons de la demande d'assistance;
 - c. la description des actes constituant le délit à propos duquel l'assistance est demandée, conformément à la législation de la Partie requérante. Le texte de la législation applicable doit être reproduit ou annexé.
 - d. les détails et les raisons de tout aspect ou procédure spéciaux que la Partie requérante peut souhaiter engager; et
 - e. la date limite à laquelle la Partie requérante aimerait que sa demande soit satisfaite.
3. En fonction de la nature de l'assistance judiciaire demandée, la demande comprend également :
 - a. toutes les informations disponibles sur l'identité et la résidence ou le domicile de la personne à localiser;
 - b. l'identité et la résidence ou le domicile de la personne devant recevoir la sommation ou la notification et la relation entre ladite personne et la procédure;
 - c. l'identité et la résidence ou le domicile des personnes appelées à fournir des preuves;
 - d. la description du lieu de la perquisition et des objets à saisir;
 - e. la mention du type de biens pour lesquels le blocage, la confiscation, la mise sous séquestre et la saisie sont demandés et la relation avec la personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée ou est sur le point de l'être;
 - f. le cas échéant, la précision du montant affecté à la mesure de précaution;
 - g. les modalités spéciales pouvant être requises pour l'exécution des mesures et les renseignements qui permettront de déterminer les autorités ou les personnes susceptibles d'être identifiées; et
 - h. toute autre information pouvant être nécessaire pour permettre de satisfaire la demande.

Si la Partie requise juge que les renseignements contenus dans la demande sont insuf-

fisants pour les permettre d'y donner suite, elle peut demander des renseignements supplémentaires à la Partie requérante.

Article 19. Communications

Les Parties communiqueront entre elles par l'intermédiaire de leurs Ministères des Affaires étrangères respectifs.

Article 20. Frais

1. Les frais courants ayant trait à l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront pris à charge par la Partie requise, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si l'exécution de la requête exige des frais extraordinaires ou considérables, les Parties se concertent afin de déterminer les conditions d'exécution de la requête ainsi que la formule de répartition des frais.

2. Les honoraires des experts ainsi que les frais de déplacement, de logement, de subsistance et les frais afférents aux témoins ou experts qui sont appelés à se déplacer à la suite d'une demande d'entraide, y compris les frais des fonctionnaires qui les accompagnent, sont à la charge de la Partie requérante.

Article 21. Confidentialité

Toute procédure engagée ou toute preuve fournie en vertu du présent Accord seront strictement confidentielles, sauf si ledit renseignement est indispensable aux enquêtes qui font partie d'une procédure judiciaire décrite dans la demande d'assistance ou lorsque la Partie requérante et la Partie requise en conviennent autrement.

TITRE IV

Article 22. Dispositions finales

Les autorités centrales se consulteront à propos des dates convenues en vue d'évaluer l'assistance fournie dans le cadre du présent Accord.

L'assistance et la procédure prévues dans le présent Accord n'empêcheront aucune Partie de fournir assistance à l'autre Partie conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquels les Parties adhèrent ou à leur propre législation.

Article 23. Interprétation

Tout différend susceptible de survenir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglé entre les autorités centrales; à défaut d'un accord en la matière, des consultations ont lieu entre les deux Parties.

Article 24. Ratification et entrée en vigueur

1. Le présent Accord reste en vigueur pendant une durée indéterminée et entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs obligations constitutionnelles.

2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une note écrite communiquée par la voie diplomatique qui prend effet six (6) mois après la date de sa réception par l'autre Partie contractante.

3. Il sera donné suite à toute demande d'assistance judiciaire présentée pendant que le présent Accord est en vigueur même si le présent Accord a été dénoncé.

Fait à Lima le 12 juillet 1994, en double exemplaire, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République de Colombie :

NOEMI SANIN DE RUBIO

Ministre des Affaires étrangères

ANDRES GONZALEZ DIAZ

Ministre de la Justice et des Affaires judiciaires

Pour la République du Pérou :

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER

Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires étrangères

FERNANDO VEGA SANTA GADEA

Ministre de la Justice

